



Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

Registro N°: 639/22

///Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de dos mil veintidós, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en el presente legajo N° **CPE 830/2015/T01/8/CFC2** del registro de esta Sala I, caratulado: "**VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/ recurso de casación**", del que **RESULTA:**

I. Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado de manera unipersonal por el juez Luis Alberto Imas, resolvió: "**...DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL, y en consecuencia SOBRESEER a Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELLA, con relación a la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social correspondientes al periodo fiscal mayo 2010, en los términos de los arts. 10 de la ley 27.541 y su modificatoria y 336 inc. 1 del C.P.P.N.**" -el resaltado corresponde al original-.

II. Que, contra esa decisión, interpuso recurso de casación el abogado Jonathan Denis Novello, en representación de la parte querellante Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva



(AFIP-DGI), el que fue concedido por el tribunal a quo y mantenido ante esta instancia.

III. Que la parte recurrente encauzó su recurso en la hipótesis prevista en el artículo 456, inciso 1 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Sostuvo que se verifica una "...errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, en este caso, la Ley 27.541 (su ampliatoria Ley 27.562) y sus resoluciones generales complementarias... [y] un supuesto de violación de la garantía constitucional de debido proceso y la defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional...". Ello, toda vez que "...[n]o se ha tenido en cuenta la información reunida en autos, la evaluación de los elementos recabados a lo largo del proceso, el análisis de la Ley 27.541, su modificatoria, y resoluciones generales complementarias, en su conjunto a partir de los elementos incorporados, demostrándose acabadamente que debe proseguirse con el análisis de las presentes actuaciones...".

Expresó que "...se deben tener en consideración las implicancias del dictado de la Ley 27.541 -de fecha 21/12/2019 con vigencia a partir del 23/12/2019-, por medio de la [cual] se dispuso, entre otras cosas, un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs, vencidas al 30/11/2019, otorgando beneficios a los contribuyentes que regularicen totalmente la deuda, produciendo la extinción de la acción penal, siempre y cuando no se verifiquen algunas de las causales objetivas y/o subjetivas de exclusión dispuestas por el mentado





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

régimen".

Manifestó que "...la citada norma fue ampliada y modificada en ciertos aspectos sustanciales, a partir de la puesta en vigencia de la Ley 27.562 publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/08/2020. Por ello, en cuanto a la aplicabilidad o no de la mentada ley y sus beneficios, los artículos que se deberían tener en cuenta a efectos de suspender la acción penal son el art. 8, art. 10 y art. 16 de la respectiva Ley, por un lado, y Art. 4° de la Resolución General 4816/2020".

Luego de citar dichos artículos, refirió que "...haciendo una lectura armoniosa entre lo establecido a partir de la Ley 27.541 -su modificatoria-, y la Resolución General (AFIP) 4816/2020, se entiende que el universo de contribuyentes que quedaría comprendido en el... inciso 'e)' [del Art. 4° de la resolución antes mencionada] resultarían ser, aquellos que, no siendo los mencionados en los incisos anteriores -incisos 'a)' a 'd)' del art. 4°-, posean activos financieros situados en el exterior, y se verifique la repatriación de al menos el 30% del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los 60 días desde la adhesión" -el subrayado es del original-.

Entendió, así, que "...el universo de contribuyentes que quedaría comprendido en este supuesto de 'demás contribuyentes', efectuando una lectura exegética de todo el articulado transcripto, resultaría ser el compuesto por los que no estén alcanzados dentro de los [incisos] citados supra, pero que siendo personas



humanas o jurídicas, y poseyendo activos en el exterior, la Administración Federal verifique que hayan repatriado al menos el 30% del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los 60 días desde la adhesión -a los efectos de considerarse sujetos comprendidos en el régimen-" -el subrayado es del original-.

Indicó que, por ello, esa parte "...[h]a formulado su constante oposición a la posibilidad de subsumir la condición del Sr. VELAZQUEZ ROTELA dentro del universo de 'demás contribuyentes', atento no contar el mismo con activos registrados en el exterior, conforme el resultado de las consultas efectuadas a las bases del organismo -sin perjuicio de la situación de repatriación o no-".

Agregó que esa parte "...manifestó [su] oposición también, atento considerar que no se encuentra comprendido tampoco el Sr. VELAZQUEZ en alguna otra de las condiciones del régimen citadas supra -en virtud de la información que fuera recabada-. Ello, atento que el mismo no podría ser caracterizado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa ni como 'condicional', por no contar con las condiciones previstas por la norma, y sumado a ello, por no haberse registrado nunca bajo tal condición ante el organismo correspondiente para ello".

Señaló que "...como 'Pequeño Contribuyente' tampoco, atento no contar con las características propias necesarias para ser considerado como tal, conforme se describió, y fue informado siempre al Tribunal", destacando que "...a través de la última parte del art. 4 inc. d), punto 2. de la RG 4816/2016, [se dispuso] una vía





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

alternativa para quienes no pudiendo encuadrar en los alcances de la definición de 'Pequeños Contribuyentes', pero... considerando que cumplen los requisitos previstos al efecto, puedan acreditar la condición mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 'Presentaciones Digitales' implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria; posibilidad que no fue utilizada tampoco por el Sr. VELAZQUEZ ROTELA -en caso que el mismo se haya considerado como tal-".

Resaltó, por último, que "...no podría ser tampoco estimado como entidad sin fin de lucro atento las características propias del mismo, que también se encuentran en los informes producidos e incorporados en el presente expediente".

Consideró, así, que "...de confirmarse lo resuelto, permitiendo la incorporación de un contribuyente a un régimen que no le corresponde y luego, este, verse beneficiado por el mismo, se estaría legislando sobre un supuesto distinto al previsto por la norma", no siendo plausible modificar sustancialmente un ordenamiento legal y desvirtuar el espíritu de una norma de tal forma. Entendió que ello permite sostener el desacierto de la resolución recurrida, viéndose esa parte obligada a articular la presente vía "...a fin de intentar obtener una sentencia que, ajustada a derecho constituya una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas del caso, [y] que no vulnere las garantías del derecho de defensa en juicio y el debido proceso ya mencionadas".

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917

Hizo expresa reserva del caso federal.

IV. Durante el término de oficina previsto en los artículos 465, cuarto párrafo y 466 del CPPN, las partes no se presentaron a ampliar o desarrollar fundamentos.

V. En la etapa prevista en el artículo 468 del CPPN, el abogado Jonathan Denis Novello presentó breves notas, reeditando las consideraciones vertidas en el recurso. Solicitó que se revoque el sobreseimiento de Juan Adalberto Velázquez Rotela y mantuvo la reserva del caso federal.

Así, la causa quedó en condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Ana María Figueroa.

El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:

I. De la resolución recurrida surge -en lo que aquí interesa- que en los requerimientos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal y la querella "*...se imputó a Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELA... la presunta omisión de [depósito] en término de los aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social retenidos a los empleados, que fueron depositados pasados los diez días hábiles administrativos posteriores al término de[1] vencimiento legal por [el período]... mayo/2010 (\$113.230,99)...*".

Dicha conducta fue calificada a tenor de lo normado en el artículo 9 de la Ley 24769 y enrostrada al imputado en calidad de partícipe necesario (art. 45 del





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

Código Penal -CP-).

II. Asimismo, de la resolución impugnada se desprende que, a raíz de diversas medidas probatorias, se determinó entre otras cosas que los aportes en cuestión se encontraban cancelados. Frente a ello, el tribunal *a quo* corrió vista a las partes, a fin de que se expidan en orden a la posible extinción de la acción penal en los términos de la Ley 27541 y su modificatoria.

La defensa particular de Juan Adalberto Velázquez Rotela sostuvo que *"...tanto... los aportes correspondientes a [la] seguridad social como los de obras sociales correspondientes al período Mayo 2010 vencedores en junio del 2010 fueron íntegramente abonados"*. Por lo que, en base a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 27541, solicitó que se declare extinguida la acción penal y se dicte el sobreseimiento del nombrado.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal expresó -en lo pertinente- que *"...si bien la defensa afirma que el imputado podría ser considerado una MiPyME a pesar de no haber tramitado el certificado, y la AFIP, por su parte, sostuvo que no está conceptualizado como pequeño contribuyente en los términos del art. 4, inc. d, de la RG 4816/2020, el imputado podría acceder de todos modos al régimen en tanto formaría parte de los '[d]emás contribuyentes...' [a los] que alude el inc. e, de la citada resolución general. A su vez, de acuerdo a la información con la que cuenta la AFIP, no se registra que el imputado tuviera en el exterior activos financieros a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.562 con un producido de*

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917

su realización, directa o indirecta, que eventualmente tuviera que ser repatriados en los términos del art. 8 de la citada RG 4816/2020...".

Consideró, al igual que la defensa, que "...correspondería extinguir la acción penal respecto del imputado Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELA conforme lo dispuesto en el art. 10 párrafo 2 de la ley 27.541, y dictar su sobreseimiento en los términos de[1] art. 336, inc. 1º, del CPPN respecto del hecho imputado por el cual se corrió vista (mayo/2010)".

Por último, la parte querellante (AFIP-DGI) manifestó que "...el contribuyente VELAZQUEZ ROTELA JUAN ADALBERTO no resulta ser 'Pequeño Contribuyente', de acuerdo a los alcances exigidos por parte de la Resolución General AFIP 4816/2020" y "...no ha registrado su inscripción [como contribuyente mipyme] a través de lo dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo tanto... no se ha acreditado de modo alguno el cumplimiento de los requisitos propios que exige la ley para poder acceder al beneficio solicitado, ello en función [de] que de producirse este beneficio, causaría una clara afectación al interés público y lo establecido como política fiscal y estrategia recaudadora del Estado".

Entendió, así, que "...no resultaría posible que se modifique sustancialmente un ordenamiento legal en la forma pretendida... ampliando el espíritu de la sanción de la norma de manera tal que quedaría desvirtuado, atento que, de admitirse lo peticionado... permitiendo la incorporación de un contribuyente a un régimen que no le corresponde y luego, este, verse beneficiado por el mismo,





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

se estaría legislando sobre un supuesto distinto al previsto por la norma".

Finalmente, el tribunal a quo resolvió: "...DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL, y en consecuencia SOBRESEER a Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELLA, con relación a la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social correspondientes al periodo fiscal mayo 2010, en los términos de los arts. 10 de la ley 27.541 y su modificatoria y 336 inc. 1 del C.P.P.N." -se prescinde del resaltado del original-.

A fin de resolver como lo hizo, recordó que "...con fecha 21/12/2019, se sancion[ó] la ley 27.541 (publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019), que de acuerdo a la modificación establecida por la ley 27.562 (publicada en el Boletín Oficial 26/8/2020), instrument[ó] un régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en dicha normativa para contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la A.F.I.P., por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020".

Luego de citar lo dispuesto por los artículos 8 de la ley antes mencionada y 4 de la Resolución General 4816/2020 de la AFIP -reglamentaria-, destacó que "...si bien es cierto [que] conforme lo sostuvo la parte querellante en su oposición, el contribuyente Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELLA, conforme lo informado por la A.F.I.P. D.G.I., no reviste el carácter de MiPyME, como



así tampoco está encuadrado como pequeño contribuyente en los términos del art. 4 inc. d) de la resolución antes referida... aquel si podría acceder de todos modos al presente régimen en tanto forma parte 'de los demás contribuyentes' [a los] que alude el inciso e) de la citada resolución general".

Resaltó, asimismo, que "...la A.F.I.P. indicó que el imputado no poseía activos financieros situados en el exterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.562 que debiera repatriar, conforme los términos y condiciones previstos en el art. 8 de la R.G 4816/2020 y art. 8 de la ley 27.541...".

Luego de hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 27.541 y su modificatoria, sostuvo que "[d]e las constancias incorporadas a las presentes actuaciones, surge que el monto de \$ 113.230,99 correspondiente a los aportes previsionales de mayo de 2010 ha sido cancelado en su totalidad con fecha 16/7/2010, es decir días después de la comisión del hecho aquí en estudio y nueve años antes de la entrada en vigencia de la ley 27.541...". Expresó, a su vez, que "...el monto de \$ 21.433,62 correspondiente a los aportes del Régimen Nacional de Obras Sociales -los cuales no forman parte del monto imputado en estos autos- también fueron cancelados en la misma fecha- o sea previo al dictado de la ley 27.541...".

Señaló que lo expuesto resulta relevante "...pues si bien el art. 8 de la ley 27.541 excluía, las deudas originadas en cuotas con destino a los aportes de las obras sociales, luego el... art. 10 de la ley 27.562





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CF2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

-modificatoria de la ley 27.541- estableció que se podrán extinguir las obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley incluidas las inherentes al régimen de obras sociales, razón por la cual lo que se excluye del régimen de la ley 27.541 son las facilidades de pago del capital e intereses adeudados respecto de los aportes a las obras sociales, pero no la posibilidad de extinción de la acción penal [cuando] la deuda ya este cancelada respecto a tales conceptos".

Consideró, por ello, que correspondía "...receptar favorablemente el planteo relacionado con el pago de la obligación tributaria realizada antes de la entrada en vigencia de la ley 27.541".

Finalmente, luego de citar lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 27541, manifestó que "[e]n el caso, el imputado Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELLA: no registra tramite de concurso o quiebra -art. 16 inc. a)-, como así tampoco registra condenas con sentencia firme por alguno de los delitos previstos en los incisos b), c) y d) -delitos tributarios, aduaneros o delitos dolosos que tengan vinculación con el incumplimiento de obligaciones tributarias, por lo tanto aquel NO registra ninguna de las causales de exclusión aludidas en el artículo citado...".

Concluyó, así, que "...en el caso, con relación a los aportes previsionales correspondientes al mes de mayo/2010, [correspondía] extinguir la acción penal respecto del imputado Juan Adalberto VELAZQUEZ ROTELLA (art. 10 párrafo 2 de la ley 27.541) y dictar su



sobreseimiento (art. 336 inc. 1 del C.P.P.N.)".

III. Reseñado así el contexto en el que se inscribe esta inspección casatoria, corresponde entrar a analizar los agravios traídos a estudio por el recurrente. Conforme a lo precedentemente expuesto, estos giran en torno a la errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva en la que habría incurrido el tribunal *a quo* y la arbitrariedad de la resolución recurrida.

En orden a ello, es menester señalar que la Ley 27541 de *"SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA"* (BO del 23/12/2019), en el Capítulo 1 de su Título IV, instauró un régimen de *"Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs"*. Luego, la Ley 27562 de *"AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19"* (BO del 26/08/2020), sustituyó su denominación por la de *"Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera"* e introdujo diversas modificaciones a la ley antes citada, a fin de ampliar el alcance de dicho régimen.

Tal como hicieron anteriormente otras leyes que establecieron regímenes similares, la norma en trato sujetó la procedencia del acogimiento a dicho régimen a la verificación de diferentes requisitos objetivos (vinculados con las obligaciones a regularizar) y subjetivos (relativos a los sujetos que podían verse favorecidos). Asimismo, previó diversos beneficios para quienes se acogieron al régimen en cuestión, tanto de carácter administrativo (exención y/o condonación de multas e intereses) como de





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

carácter penal (suspensión y, una vez cancelada la deuda, extinción de la acción penal).

En lo que aquí interesa, el artículo 8 de la Ley 27541 -modificado por la Ley 27562- estableció que "[l]os contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo".

Asimismo, dispuso que "[s]e excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917

que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación".

Además, determinó que "[p]ara la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley".

En cuanto a los beneficios de carácter penal para quienes se acogieran al régimen en cuestión, el artículo 10 de dicha norma estableció, en lo pertinente, que "[e]l acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme".

Asimismo, dispuso que "[l]a cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales..."

Luego, el artículo 14 de la ley bajo análisis aclaró, en lo que aquí interesa, que "[r]especto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal previstas para los contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión previstas en términos generales".

Por último, el artículo 17 de la norma en trato estableció que "[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos dictará la normativa complementaria necesaria para implementar las condiciones previstas en el presente régimen, a cuyo efecto: a) Establecerá los plazos y las formas para acceder al programa de regularización que se aprueba por la presente ley modificatoria, y sus reglas de caducidad; b) Definirá condiciones diferenciales referidas a las establecidas en el presente capítulo, a fin de: 1. Estimular la adhesión temprana al mismo. [y] 2. Ordenar la refinanciación de planes vigentes".

A su vez, dispuso que "[e]n el ejercicio de sus facultades, dicho organismo orientará su actuación de manera tal de propender a la consecución de los cometidos perseguidos por esta ley, entre los que cabe contar la recuperación de la actividad productiva y la preservación



de las fuentes de trabajo. En este sentido, adecuará su reglamentación para permitir la adhesión al presente régimen de todos los contribuyentes o todas las contribuyentes".

Por su parte, el artículo 3 de la Resolución General 4816/2020 de la AFIP -reglamentaria de la Ley 27541, modificada por la Ley 27562- (BO del 16/09/2020), al referirse a los conceptos y sujetos excluidos, previó que "[q]uedan excluidos del régimen... k) Los sujetos que resultaran excluidos en los términos del artículo 16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones".

Por último, el artículo 4 de dicha resolución, al tratar los tipos de contribuyentes comprendidos, reseñó que "[e]l universo de contribuyentes comprendidos en el presente régimen de regularización se encuentra conformado según se indica a continuación [por]: a) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con "Certificado MiPyME" vigente a la fecha de adhesión, obtenido de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias. b) "Condicionales": contribuyentes que acrediten el inicio del trámite de inscripción en el "Registro de Empresas MiPyMES" a la fecha de adhesión al régimen, de acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones. c) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias (4.1.), entes públicos no estatales y entidades comprendidas en los incisos b), e), f), g) y l) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación,

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917



Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I

Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2

"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

en cuyo caso deberán encontrarse registradas ante esta Administración Federal bajo alguna de las formas jurídicas que, según corresponda, se indican a continuación... De no registrar alguna de las formas jurídicas detalladas precedentemente, se deberá acreditar [dicha] condición... mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 'Presentaciones Digitales' implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria... debiendo adjuntar la documentación de respaldo que acredite dicha condición... d) "Pequeños Contribuyentes", entendiéndose por tales a las personas humanas y sucesiones indivisas que, registrando la inscripción en los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) al día de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 y habiendo registrado la condición de activo en alguno de dichos impuestos durante el año 2019, cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones... Los contribuyentes y/o responsables que no resulten caracterizados como 'Pequeños Contribuyentes' -conforme lo dispuesto en los párrafos anteriores- y consideren que cumplen los requisitos previstos al efecto, podrán acreditar la condición mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 'Presentaciones Digitales' implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria... debiendo aportar la documentación de respaldo que resulte pertinente... e) Demás contribuyentes no comprendidos en los incisos precedentes. La dependencia interviniente de este Organismo efectuará las verificaciones que correspondan a fin de constatar las condiciones a que se refiere el

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917

artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones".

IV. Limitada la cuestión a los agravios introducidos por el recurrente, corresponde analizar cuáles son los sujetos que se encuentran alcanzados por el régimen de *"Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera"*, tal y como quedó previsto en la Ley 27541, modificada por la Ley 27562.

De la lectura de los artículos antes citados se desprende que el régimen en cuestión comprende a los contribuyentes y a los agentes de retención y percepción en general, revistan o no las condiciones descriptas en los incisos "a" a "d" del artículo 4 de la Resolución General 4816/2020 de la AFIP.

El artículo 8 de la ley antes referida no impone como condición que los sujetos que no revistan tales características posean activos financieros situados en el exterior y repatrién al menos el 30% del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los 60 días desde la adhesión al presente régimen, como alega el recurrente. Más bien, la posesión de activos financieros situados en el exterior, al igual que las situaciones previstas en el artículo 16 de dicha norma, resulta una causal de exclusión, excepto que se verifique, en el porcentaje y el plazo antes mencionados, la repatriación del producido de su realización.

Es menester resaltar que, conforme a la doctrina sentada por la CSJN sobre la interpretación de las leyes, la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley. Los jueces no pueden





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos 299:167; 300:700 y 302:973; entre otros).

De modo que, las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico. Máxime, cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común, la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y los principios y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, éstas deben interpretarse evitando darle a esas palabras un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:297; 295:376 y 312:1614; entre otros).

Por otro lado, de acuerdo a la doctrina sentada por la CSJN, la exégesis de la ley requiere de la máxima prudencia. Ello es así, a fin de cuidar que la inteligencia que se le asigne no conduzca a la pérdida de un derecho, o bien, el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que inspiró su sanción (Fallos 303:578; entre otros).

Desde esta perspectiva, el artículo 17 de la ley antes citada, al disponer que la AFIP adecuará su reglamentación para permitir la adhesión al presente régimen de todos los contribuyentes, demuestra que esta fue la intención del legislador, no pudiendo establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la ley.

Fecha de firma: 03/06/2022

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35484505#329961923#20220602140033917

En estas condiciones, la interpretación efectuada por el tribunal de la normativa en cuestión, en cuanto fue materia de agravio por parte del recurrente, no luce errónea en el caso, ni viola la garantía de debido proceso y el derecho a la defensa en juicio, como alega la parte en su impugnación. De modo que, teniendo en cuenta que el recurrente no cuestiona en su presentación las restantes consideraciones efectuadas por el *a quo* -en cuanto a que Juan Adalberto Velázquez Rotela no poseía activos financieros situados en el exterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley, a la cancelación de los aportes adeudados, y a la concurrencia de los restantes requisitos establecidos en la normativa en trato-, en los términos aquí analizados, cabe concluir que la resolución recurrida constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso.

En función de todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto por el abogado Jonathan Denis Novello, en representación de la parte querellante (AFIP-DGI), con costas (arts. 470 y 471 -a *contrario sensu*-, 530 y 531 del CPPN) y tener presente la reserva del caso federal.

Tal es mi voto.

El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:

Que por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos expuestos por el colega que inaugura el acuerdo, doctor Daniel Antonio Petrone, adherimos a la solución propuesta y expedimos nuestro voto en igual sentido.





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - Sala I
Causa N° CPE 830/2015/T01/8/CFC2
"VELAZQUEZ ROTELA, Juan Adalberto s/
recurso de casación"

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

Que del estudio de la resolución puesta en crisis y de los agravios invocados por el recurrente, concuerdo, en el particular caso de autos, con la solución propuesta por el juez que inaugura la votación -que cuenta con la adhesión del juez Barroetaveña-, por compartir el análisis y fundamentos desarrollados en los considerandos II, III y IV de su voto.

En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella, con costas.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal **RESUELVE:**

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el abogado Jonathan Denis Novello, en representación de la parte querellante (AFIP-DGI), con costas (arts. 470 y 471 -a *contrario sensu*-, 530 y 531 del CPPN).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

